

JOSÉ GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO
Magistrado

Referencia: VERBAL – RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
Demandante: JESÚS HUMBERTO ROJAS TORRES
CONSUELO MARÍA RODRÍGUEZ PÉREZ
KAREN LUCELLY ROJAS RODRÍGUEZ
MARIA ALEJANDRA ROJAS RODRÍGUEZ
Demandado: SOCIEDAD HUEVO DELICIAS GROUP S.A.S.
SERGIO ALBERTO LÓPEZ SUÁREZ
Decisión: Revoca auto
Radicado: 05001 31 03 016 2019 00098 01
Auto Nro.: 079

DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA UNITARIA DE DECISIÓN

Medellín, veinticinco de julio de dos mil veintitrés

Procede esta Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante en contra de la decisión emitida el 26 de mayo de 2023 por el JUZGADO DIECISÉIS CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, mediante la cual se resolvió de forma desfavorable la solicitud de interrogar a su representado Jesús Humberto Rojas Torres.

ANTECEDENTES

Dentro del proceso de la referencia, mediante providencia del 11 de marzo de 2019 se admitió la demanda incoativa de proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual que promueve Jesús Humberto Rojas Torres, Consuelo María Rodríguez Pérez, Karen Lucelly Rojas Rodríguez y María Alejandra Rojas Rodríguez, en contra de la sociedad Huevo Delicias Group S.A.S. y Sergio Alberto López Suarez.

Dentro del trámite procesal, una vez agotadas las etapas preliminares, el 26 de mayo de 2023 se llevó a cabo la audiencia inicial contemplada en el artículo 372 del Código General del Proceso, donde se agotó la etapa

de conciliación, interrogatorio de parte, fijación del objeto de litigio, práctica de prueba testimonial y el decreto de prueba de oficio.

El apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación frente a la decisión de negar la oportunidad de interrogar a su poderdante Jesús Humberto Rojas Torres, argumentando que, *“todos pueden interrogar y es de importancia la solicitud teniendo de presente que el demandante es el testigo único de los hechos.”*

En este orden, corrido el respectivo traslado a la parte demandada, el juez A quo reiteró la negativa de conceder la práctica de la prueba aducida, por considerar que, el apoderado judicial no solicitó la misma en la oportunidad procesal pertinente, con base que *“no se cumple con las formalidades del artículo 82 del Código General del Proceso que señala los requisitos de la demanda, entre ellos la petición de las pruebas que se pretende hacer dentro del proceso, el artículo 164 ibídem que establece, toda decisión debe fundarse en las pruebas oportunamente allegadas dentro del proceso, que deben hacerse dentro del escrito de la demanda, o eventualmente dentro del traslado de las excepciones que presenta la contraparte y con fundamento en el artículo 191 que da a entender que las partes tienen derecho a interrogar a la misma parte cuando dice que la simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas.”*

De esta forma, el actor propuso recurso de apelación contra la decisión adoptada por el A quo, el cual fue concedido en efecto diferido acorde a lo dispuesto en el artículo 321 del Código General del Proceso. Conforme a lo expuesto en el recurso de alzada, este Despacho procede a determinar la procedencia o no del decreto de la prueba solicitada por la parte demandante en el proceso de la referencia.

En este orden, siendo la oportunidad para resolver, a ello se procede previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. Dentro del proceso declarativo de la referencia, el apoderado judicial de la parte demandante solicitó se le conceda como prueba la práctica del interrogatorio a su poderdante, petición que fue negada por el Juez de primera instancia, argumentando que la solicitud no se realizó en la oportunidad procesal pertinente.

Al respecto, vale la pena señalar que, en virtud de lo normado en el artículo 174 del C de P Civil, *"toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso"*, no obstante, el canon 178 de la misma codificación, faculta al Juez para rechazar la práctica de pruebas *"legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifestaciones superfluas"*.

Así mismo, el Estatuto Procesal en el artículo 173 establece las oportunidades probatorias, de este modo para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señaladas, *"En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estén hayan aportado..."*

2. En el caso *sub judice*, dentro del proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual que promueve Jesús Humberto Rojas Torres, Consuelo María Rodríguez Pérez, Karen Lucelly Rojas Rodríguez y María Alejandra Rojas Rodríguez, en contra de la sociedad Huevo Delicias Group S.A.S., y Sergio Alberto López Suarez, de radicado [05001-31-03-016-2019-00098-01](#), el A quo en audiencia inicial efectuada el 26 de mayo de 2023 decidió negar la oportunidad al apoderado judicial de la parte demandante de interrogar a su poderdante Jesús Humberto Rojas Torres.

En punto la tema, la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC2156 del 28 de febrero de 2020 M.P. Luís Armando Tolosa Villabona advirtió que:

"Tal aspecto, exige al juzgador prepararse para la inmediación de la enunciada probanza e, igualmente, para concentrar¹ el mayor número etapas posibles para definir la contienda de manera célere.

Ello implica que el interrogatorio de las partes previsto en el numeral 7º, canon 372 ídem se tramita en ese acto y, allí tras el cuestionario que efectúa el juez de manera oficiosa, se realiza el deprecado por los extremos del litigio, pues ese precepto es claro en ello, al disponer:

"(...) Interrogatorio de las partes, práctica de otras pruebas y fijación del litigio. **Los interrogatorios de las partes se practicarán en la audiencia inicial** (...).

"(...) El juez oficiosamente y de manera obligatoria interrogará de modo exhaustivo a las partes sobre el objeto del proceso. También podrá ordenar el careo (...)"

"(...) El juez **podrá decretar y practicar** en esta audiencia **las demás pruebas** que le resulte posible, **siempre y cuando estén presentes las partes** (...)"

De tal modo, no sólo el interrogatorio de parte que debe realizar el juez oficiosamente y de manera obligatoria, puede consumarse en la audiencia inicial, sino también el solicitado por los contradictores, pues aparte de no distinguir el legislador si únicamente procede la intervención del fallador, la sistemática del precepto así permite entenderlo. Entre otras razones, porque su consumación, inclusive por quien la ha solicitado, materializa los principios procesales de economía e inmediación y facilita el desarrollo de las fases de la audiencia como la conciliación y fijación de hechos probados.

Por ello, carece de sentido que el director del proceso no permita el cuestionamiento entre las partes ahí mismo, bajo el argumento según el cual, debe mediar el decreto del interrogatorio de parte como medio de prueba, para evacuarlo, posiblemente, en la vista pública de instrucción y juzgamiento, cuando de antemano, al señalarse fecha para la audiencia inicial, ya aparece decretado, ciertamente, para ser evacuado en esa diligencia, primero por el juez y luego por quien pidió la prueba. Desde luego, la posibilidad de practicarlo posteriormente

¹ "(...) Artículo 5º. Concentración. El juez deberá programar las audiencias y diligencias de manera que el objeto de cada una de ellas se cumpla sin solución de continuidad. No podrá aplazar una audiencia o diligencia, ni suspenderla, salvo por las razones que expresamente autoriza este código (...)"

es excepcional, en tanto sólo ocurre cuando es aceptada la excusa de inasistencia de la parte. (Subrayas propias)

Vistas en coherencia las disposiciones generales, especialmente, el principio de concentración (art. 4º C.G.P.), el inciso segundo del artículo 170, el precepto 372, ambos del C.G.P., en relación con el artículo 29 de la Constitución y las reglas 228 - 230 de la misma normativa, no hay duda que las decisiones censuradas, infringen rectamente el derecho fundamental al debido proceso, por cuanto el texto y contexto del problema jurídico, hacen imperativo el derecho fundamental de contradicción en todas la fases del proceso, con autorización concreta y expresa, tratándose para las pruebas de oficio, como la que concita la atención de la Sala, donde expresamente el artículo 372 del C.G.P...”

Bajo esta línea argumentativa, es factible que al momento en que se dé el interrogatorio que debe realizar el juez, las partes soliciten formular cuestionamientos aclaratorios o ampliación a las respuestas dadas en tal diligencia; en tanto que, en ese momento es posible efectuar tales ajustes en la medida de la pertinencia, incluso sobre los hechos materia de debate y frente a los cuales no se cuestionó al interrogado, incluso por su propio apoderado, por lo que la negativa del juez vulnera no solo normas adjetivas, sino garantías propias del debido proceso. Lo anterior tiene sustento en lo que establece la citada normativa, en el artículo 372 en donde se dispone que, *...el juez citará a las partes para que concurran personalmente a rendir interrogatorio, a la conciliación, y a los demás asuntos relacionados con la audiencia.* De este modo, en principio, en la etapa procesal de la audiencia inicial deberá realizarse el interrogatorio de las partes que hubieran deprecado sus contrarias o que de manera oficiosa debe efectuar el juez, según lo previsto en el numeral 7, canon 372 ídem.

Como puede apreciarse, la petición probatoria del demandante cuenta con fundamento sólido que justifican sea atendida, pues la misma tiene por finalidad efectuar aclaraciones o ampliaciones sobre los aspectos contenidos en las respuestas al interrogatorio del director de la audiencia, con la medida de la pertinencia, en tanto puedan constituir hechos nuevos

relevantes que ameriten ser dilucidados por la propia parte, para el caso la actora.

Por lo anterior, resulta razonable la posición del apoderado del demandante y en ese sentido el iudex a quo debe posibilitar, en la bilateralidad de la audiencia, la declaración de las partes, en tanto que, son los que tienen conocimiento directo de los hechos; las mismas que serán valoradas con los criterios de ley. Corolario de lo expuesto, la decisión del Juez de primer grado será REVOCADA y en su lugar se ordenará que se cite a las partes a audiencia en la cual se permitirá al señor Jesús Humberto Rojas Torres, responder las preguntas de su propio apoderado para aclarar los cuestionamientos ya realizados o para determinar los hechos motivo del petitum.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,**

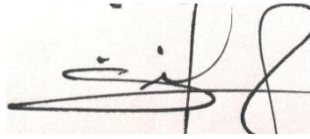
RESUELVE:

PRIMERO. REVOCAR el auto de fecha y procedencia indicado en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se ordenará que se cite a las partes a audiencia en la cual se permitirá al señor Jesús Humberto Rojas Torres, responder las preguntas de su propio apoderado para aclarar los cuestionamientos ya realizados o para determinar los hechos motivo del petitum.

SEGUNDO: Sin **COSTAS** en esta instancia.

TERCERO. Para los efectos del inciso segundo del artículo 326 del C. General del P., se ordena comunicar lo decidido.

NOTIFÍQUESE



JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO
Magistrado